El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

Proceso: Acción de tutela

Radicado: 66001-31-03-001-2023-00040-01

Accionante: Carlos Arturo Merchán Forero

Accionados: Colpensiones

**TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / TITULAR DE LOS DERECHOS AFECTADOS O SU REPRESENTANTE / APODERADO JUDICIAL / REQUISITOS / SER ABOGADO / TENER PODER ESPECIAL.**

Si bien el canon 86 superior instituye un mecanismo informal y expedito en cuanto su ejercicio, que procura el resguardo de garantías fundamentales, cuando se dice que puede promoverla la persona que se estime afectada por sí misma o por quien actúe en su nombre, lo que reproduce el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, se abren paso varias alternativas, a saber: i) Agencia oficiosa, ii) Defensoría del pueblo o Personerías y iii) Por conducto de un representante judicial debidamente habilitado.

Cuando se actúa a través de profesional de derecho, ha precisado la Corte Constitucional:

“la presentación de tutela por medio de representante implica que “i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.

No es de recibo que, al momento de promover la acción de tutela, contestar los requerimientos del a quo… o impugnar el fallo, invoque como suyos los derechos de quien, con antelación, dice representar, como corrobora la calidad con que se exhibe ante COLPENSIONES.

… el análisis gira en torno a la calidad subjetiva del actor respecto del interés sustancial puesto en conocimiento del juez constitucional, pero, la supuesta afectación que dice se predica de la omisión de la entidad en su contra, no es más que un planteamiento abstracto, con independencia de los efectos que se desprendan de la eventual respuesta…

****

**TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA**

**Sala de Decisión Civil Familia**

**EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

Magistrado ponente

**ST2-0144-2023**

Acta N. 218 de 09-05-2023

Pereira, nueve **(9)** de mayo de dos mil veintitrés **(2023)**

**1. ASUNTO A DECIDIR**

Se decide la impugnación formulada por Carlos Arturo Merchán Forero, a la sentencia proferida el día 9 de marzo de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela de la referencia.

**2. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y SU CONTESTACIÓN (art. 280 CGP)**

**2.1. La demanda.** El accionante impetró el amparo constitucional al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, por lo que, en síntesis, se expone:

**2.1.1**. El 2 de diciembre de 2022 solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones información relacionada con el cumplimiento de la resolución SUB216153 del 8 de octubre de 2022.

**2.1.2.** A la fecha de promoción de la acción constitucional no había obtenido respuesta de fondo.

**2.1.3.** Pidió, conforme a lo relatado, se protejan los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la accionada **i)** *resolver de manera integral y de fondo la solicitud presentada el 2 de diciembre de 2022*, en el término de 48 horas.

**2.2.** **Respuestas de la accionada.**

**2.2.1. Colpensiones** aseguró que la petición en comento *(…) fue atendida por la Dirección de Nomina de Pensionados, mediante el Oficio BZ2022\_17872649-3697919 del 09 de diciembre de 2022, entregado el 20 de diciembre de 2022 como consta a través de la guía de envío Nro. MT718364644CO*, remitida a la dirección dispuesta por el accionante, por lo que se constituye carencia actual del objeto por hecho superado, rogando esa declaratoria.

También discurrió en torno a la diferencia entre el derecho de petición y el de lo pedido e inexistencia del hecho vulnerador.

**3. SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira declaró improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.

Previas citas normativas, jurisprudenciales y del precedente de este tribunal, estimó que *el derecho de petición invocado por el accionante y del cual reclama su respuesta a través de esta acción, lo realizó como apoderado judicial de la señora Idaly Osorio Salazar, por lo que no cuenta con legitimación para presentar el amparo a nombre propio.*

Como tampoco adosó poder extendido por los herederos de la prenombrada, no es titular del derecho de petición cuyo resguardo busca, pues *por el hecho de representarla en un proceso laboral que aún no ha terminado, no puede el abogado presentar la acción de tutela a su nombre.*

**4. LA IMPUGNACIÓN.**

El accionante manifestó su inconformidad con la decisión adoptada, pidió se revoque y, en su lugar, se amparen los derechos invocados.

Dijo que la legitimación le está dada por haber sido el solicitante de la información que extraña, afectado con la omisión de la entidad. Que, aunque la averiguación esté relacionada con un proceso judicial, *los efectos que se pretenden de la solicitud abarcan o afectan la función que se presta por el abogado en dicho procedimiento.*

Que, como la convocada no ha remitido o comunicado respuesta a la solicitud presentada el 2 de diciembre de 2022, ni se ha negado a hacerlo, está incumpliendo mandatos legales y constitucionales de resolver de manera pronta, congruente y de fondo.

**5. RAZONAMIENTOS DE ORDEN LEGAL Y DOCTRINARIOS (art. 280 C.G.P.)**

**5.1.** **Competencia.** Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia (art. 86 C.P., Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000).

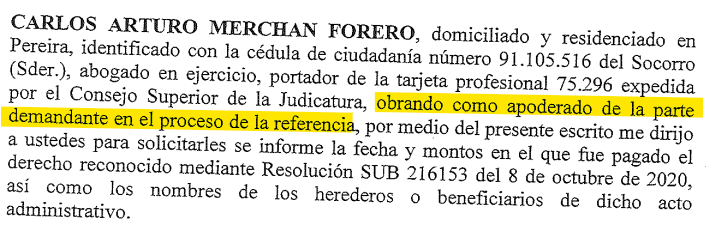
**5.2. Legitimación en la causa.** En el presente caso es, precisamente, la insatisfacción de este requisito la que dio al traste con el amparo por improcedente y, a la par, el motivo principal del disenso del actor.

Si bien el canon 86 superior instituye un mecanismo informal y expedito en cuanto su ejercicio, que procura el resguardo de garantías fundamentales, cuando se dice que puede promoverla la persona que se estime afectada por sí misma o por quien actúe en su nombre, lo que reproduce el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, se abren paso varias alternativas, a saber: i) Agencia oficiosa, ii) Defensoría del pueblo o Personerías y iii) Por conducto de un representante judicial debidamente habilitado.

Cuando se actúa a través de profesional de derecho, ha precisado la Corte Constitucional:

*“la presentación de tutela por medio de representante implica que “i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser un poder especial;* ***iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial****; v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional[[1]](#footnote-2)”*

En el caso de marras, dice el actor que es él quien eleva la petición, pero como con acierto se indicó en el fallo rebatido, no lo hizo en nombre propio, como se ve:



No es de recibo que, al momento de promover la acción de tutela, contestar los requerimientos del *a quo* (Arch.012 Cuad.01PrimeraInstancia)o impugnar el fallo, invoque como suyos los derechos de quien, con antelación, dice representar, como corrobora la calidad con que se exhibe ante Colpensiones.

Otra es la dificultad que emerge del fallecimiento de Idaly Osorio Salazar, sin que sea esta la oportunidad para discurrir en torno a la ejecución del poder (mandato) tras el deceso de la mandante, porque ningún acto de apoderamiento milita en el expediente para examinarlo de conformidad con los preceptos del Código Civil (Artc.2142 y s.s. y 2189 y s.s.) y del C. G. del P. (Art.68, 74 y 76).

En efecto, el análisis gira en torno a la calidad subjetiva del actor respecto del interés sustancial puesto en conocimiento del juez constitucional, pero, la supuesta afectación que dice se predica de la omisión de la entidad en su contra, no es más que un planteamiento abstracto, con independencia de los efectos que se desprendan de la eventual respuesta, porque él mismo insiste en que se relacionan de manera directa con *la función que se presta por el abogado en dicho procedimiento*.

Además, no es condición para declarar la falta de legitimación que así lo alegue la autoridad o entidad contra quien se dirige la acción, como lo insinúa el recurrente, pues ese requisito de procedibildad constituye presupuesto procesal de la acción, es decir, es necesario para proveer el fondo del asunto y, por lo tanto, su estudio es un deber del juzgador.[[2]](#footnote-3)

**5.2.** La lógica consecuencia de estos defectos es el agotamiento del examen en esta etapa, como lo hizo la juez de instancia, cuya providencia se confirmará.

**7. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**Primero:** Confirmarel fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira.

**Segundo:** Notifíquese esta decisión a los interesados por el medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992).

**Tercero:** Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**Notifíquese y cúmplase**

Los Magistrados,

**EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS**

**JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO**

**CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS**

1. Sentencia SU-388 de 2022, citando T-024 de 2019. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sentencia SU-454 de 2016 [↑](#footnote-ref-3)